

Cooperación internacional, Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y Latinoamérica

Para comprender la importancia de la cooperación internacional mexicana en los ámbitos referidos y su participación en la conformación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es necesario explicar, al menos de forma breve, el contexto global y regional en el cual los Estados latinoamericanos y caribeños, en su calidad de países de renta media, pretenden conciliar el cumplimiento de los ODM con los criterios de asignación de AOD, junto con su participación en el diseño de la citada agenda.

Lo anterior, más allá de avalar tal estratificación socioeconómica en términos de ingreso, se explica debido a que tal indicador incide en buena medida en el estatus que le confieren los organismos multilaterales y los donantes tradicionales a los países del Sur, en el marco del sistema global de cooperación internacional para el desarrollo.

Esto se evidencia, por un lado, por el hecho de que los oferentes de ayuda oficial le dan prioridad al combate de la pobreza y a sus efectos más inmediatos de forma preferencial en países de bajos ingresos, dado que son los que registran mayores rezagos en términos de cumplimiento de los ODM.

De ahí que, con base en los criterios de ingreso per cápita y logro de los ODM, la ayuda oficial para el desarrollo que recibe en su conjunto América Latina y el Caribe, si bien históricamente no ha sido alta, ha descendido en años recientes. Este hecho es acentuado,

precisamente, a partir de la década del 2000, en el marco del impulso a los ODM (CEPAL, 2012: 10-11).

Desde esta visión, los países de renta media como los latinoamericanos y del Caribe, quienes registran en términos generales datos alentadores respecto al cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ONU, 2013a), necesitarían en principio un menor apoyo del sistema de cooperación internacional. Este fenómeno se conoce como “proceso de graduación”. Ello se traduce en una canalización de los recursos hacia países de menores ingresos, en detrimento de los países de renta media y, por ende, de Latinoamérica y el Caribe (CEPAL, 2012: 7).³

En materia de cumplimiento de los ODM en Latinoamérica y El Caribe, aunque los datos no son en todos los casos promisorios, en buena medida la situación de la región en su conjunto fue alentadora (con excepción, entre otros, de la sostenibilidad ambiental), dado que se registraron avances en prácticamente todos los objetivos y metas. En este sentido, que la cantidad de personas que viven con recursos menores de 1.25 dólares diarios hubiese disminuido de 11 %, en 1990, a 8 %, en 2005, evidencia importantes avances a este respecto, aunque la inequidad de ingreso y capacidades no ha dejado de aumentar.

Lo anterior es muy relevante dado que, como señala Freres, los grandes propósitos de los esquemas tradicionales (donante-receptor) del sistema de cooperación internacional para el desarrollo y sus respectivos criterios de otorgamiento de colaboración externa, diseñados por el Norte (como los propios ODM), no se adaptan del todo a las particularidades en términos de logros y rezagos de desarrollo e inequidad en Latinoamérica y el Caribe.

³ Muestra de ello es que en 1990 prácticamente la mitad de la ayuda oficial fue provista a países de bajos ingresos y países menos desarrollados. En el año 2010, este grupo aumentó su participación en los flujos de AOD, logrando concentrar cerca de 66% de este tipo de apoyos externos. Frente a ello, se ha registrado una disminución de canalización de ayuda a los países de renta media: si en 1990 estos últimos recibieron en promedio una mayor porción de la asistencia oficial que los países de menores ingresos (55% y 45%, respectivamente), en 2010 su participación se redujo significativamente, dado a que recibieron solamente la mitad de la ayuda destinada a los países de bajos ingresos y menos desarrollados (Ibidem).

De ahí que el referido analista, haciendo alusión a los ODM, mencione:

La comunidad internacional ha definido una agenda de cooperación que aplica a los países latinoamericanos a pesar de que dicha agenda se orienta principalmente a abordar unas condiciones más propias de los países de renta baja. Hasta ahora, no parece que se haya dedicado mucho esfuerzo a buscar formas de adaptar esa agenda a realidades distintas, en particular las del amplio grupo de los países de renta media, entre los cuales están los Estados latinoamericanos. Dicho de otra manera, la agenda internacional no sólo no se adecúa del todo a la realidad latinoamericana, sino que esta realidad ha ido cambiando rápidamente, de manera que hay un importante desajuste entre la oferta de la cooperación y las demandas y la situación de la región (Freres, 2010,p. 21).

Si a este fenómeno se le añade que la seguridad constituye un criterio adicional en la dinámica de otorgamiento de ayuda oficial a los países del Sur en general y a los latinoamericanos en particular, “ambas tendencias —‘efecto ODM’ y ‘seguritización’ de la ayuda— han tenido efectos visibles en el “mapa” que refleja la distribución de la ayuda entre países de América Latina” (Sanahuja, 2011, p. 204). Lo anterior ocasiona que Colombia y en años recientes México vean aumentar este tipo de recursos provenientes de donantes estratégicos para atender propósitos supeditados a la lógica de la seguridad. Brasil registró de igual forma aumentos significativos, debido a su relevancia geoestratégica y económica.

A raíz de las referidas distorsiones de los criterios por parte de los donantes tradicionales respecto al otorgamiento de ayuda oficial, en donde propósitos abstractos en materia de pobreza y preceptos definidos con base en motivaciones geoestratégicas, económicas y de seguridad suelen ser la pauta, los países del Sur han impulsado modalidades de colaboración entre sí que pretenden superar tal situación.

De ahí que los países latinoamericanos y caribeños, con el ánimo de insertarse de mejor manera en el sistema de cooperación

internacional para el desarrollo (CID) mediante acciones que atiendan en una dimensión más acertada a sus necesidades hemisféricas y regionales en términos de desarrollo, en años recientes han dinamizado su respectiva cooperación Sur-Sur. Esta estrategia les ha permitido de forma paulatina ampliar su voz y presencia en los foros internacionales, en donde se configuran las directrices de la agenda global de desarrollo y temas afines.

Es por ello que Emma Mawdsley, haciendo referencia a la CSS, señaló que “si bien constituye un modesto elemento de las múltiples manifestaciones de la agenda política y económica exterior de los países emergentes, hoy en día su práctica comprende un rol tal que está consiguiendo transformar la geografía del poder mundial” (Mawdsley, 2012, p. 12).

En síntesis, debido a los relativos avances en torno a los Objetivos del Milenio en América Latina y el Caribe, en años recientes —y en particular desde el año 2000— esta región en su conjunto ha visto disminuir la ayuda oficial ofrecida por los donantes tradicionales. A la par de ello, se evidencia un déficit de asimilación de las necesidades y desafíos que en materia de desarrollo experimenta Latinoamérica y el Caribe por parte de las estructuras tradicionales de cooperación internacional, las cuales se han abocado a darle prioridad al combate a la pobreza y a las pretensiones supeditadas a preceptos restrictivos de seguridad.

Como se ha señalado, tal situación genera que esta forma clásica de cooperación en buena medida deje a un lado la atención a necesidades de más honda envergadura en términos de desarrollo —como la inequidad— en su dimensión de retos estructurales inherentes a la realidad latinoamericana y caribeña.⁴

De forma simultánea se experimenta un renovado peso específico e influencia por parte de los países emergentes en los procesos ten-

⁴ Javier Surasky confirma dicha aseveración cuando afirma que “los ODM pueden leerse en clave de una “adaptación a la baja” de aquellas [cumbres mundiales de los noventa], llevando los compromisos a un compromiso mínimo, lo que nuevamente demuestra que tras los mismos existe una lógica de abordaje de la pobreza más que del desarrollo” (Surasky, 2010, p. 220).

dientes a impulsar una gobernanza política, económica y de la cooperación al desarrollo de forma más democrática y participativa, lo cual se explica en parte a la luz del reposicionamiento de la CSS en los escenarios globales de la cooperación para el desarrollo.

Es en este complejo y dinámico contexto, en que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se conformó, pretendiendo ser más abierta y adaptativa respecto a las necesidades y particularidades de los países del Sur. Se trata, en definitiva, de una coyuntura propicia en donde países emergentes latinoamericanos, como México, se encuentran dispuestos a aprovechar en aras de contribuir en los procesos de definición, promoción y cumplimiento de aquellos nuevos propósitos en el ámbito del desarrollo que fueron incluidos en la agenda que entró en vigor en el año 2015.